

TERCERO. – Siendo así las cosas, me presenté a la convocatoria N° 4 de la que trata el *Acuerdo No. CSJBOYA-17-699 de 06 de octubre de 2017*, con el fin de aspirar al cargo de Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en la cual, a la fecha en la que aspiré, cumplía con los siguientes requisitos:

Requisitos generales para aspirar al cargo objeto de la convocatoria — Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad— consagrados en el Acuerdo No. CSJBOYA-17-699 de 06 de octubre de 2017	Requisitos específicos para aspirar al cargo objeto de la convocatoria — Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad— consagrados en el acuerdo No. CSJBOYA-17-699 de 06 de octubre de 2017
Presentar solicitud de inscripción en la forma y dentro de los términos que más adelante se señalan —esto es, en los días 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 y 23 de octubre de 2017—.	Título de formación universitaria en trabajo social, psicología o sociología.
Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.	
No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.	Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.
Reunir las condiciones y requisitos que para cada cargo establezca la Ley y los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura	Dos (2) años de experiencia profesional.
No haber llegado a la edad de retiro forzoso (70 años).	

CUARTO. – El diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022), el Consejo Superior de la Judicatura emitió *Acuerdo PCSJA22-120228*, mediante el cual se crea un (1) cargo de **ASISTENTE SOCIAL DE CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD GRADO 18** del Centro de Servicios Administrativos de Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá—. —Ver prueba 2—.

QUINTO. – El dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023) la señora **CAROLINA GARCÍA VELA** fue posesionada como **ASISTENTE SOCIAL GRADO 18** en el **JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS —CUNDINAMARCA—**. —Ver prueba 3—.

SEXTO – El siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023) la señora Carolina García Vela; solicitó traslado del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas —Cundinamarca— al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá—.

SÉPTIMO – El catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023), El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare emitió *Acuerdo N°. CSJBOYA23-38*, mediante el cual conformó la lista de elegibles destinada a la provisión del cargo de Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá—, dentro de la convocatoria N° 4 del concurso de méritos convocado mediante el *Acuerdo No. CSJBOYA-17-699 de 06 de octubre de 2017*, así: —Ver prueba 4—.

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA					
CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRE	CÓDIGO	CARGO	GRADO	PUNTAJE TOTAL
40.047.720	CORREALES GUIO	260505	Asistente Social de Centro de	18	787,82

	EDITH JASMINA		Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad		
7.179.328	BARON CHAPARRO EDWIN ALBERTO	260505	Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	18	737,22
40.041.123	FORERO CELY PAOLA ANDREA	260505	Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	18	710,58
7.188.409	ESPINOSA RIVERA JULIAN FERNANDO	260505	Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	18	641,10
7.174.130	ORTIZ PEÑA FRANKY ALEXY	260505	Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	18	629,46

OCTAVO. – El veintiuno (21) de abril de dos mil veintitrés (2023) el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial emitió concepto favorable respecto del traslado de la señora Carolina García Vela del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas —Cundinamarca— al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá—. —Ver prueba 5—.

NOVENO. – El treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023) la Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare mediante oficio CSJBOYO23-1835 remitió al Juez Coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja — Boyacá—: (i) Lista de Elegibles conformada a través de *Acuerdo N°. CSJBOYA23-38* de catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023); y (ii) concepto favorable de traslado de la señora Carolina García Vela.

DÉCIMO. – Luego, mediante Resolución 071 calendada primero (1º) de agosto de dos mil veintitrés (2023) la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se dispuso a **ACEPTAR EL TRASLADO** de la

señora Carolina García Vela del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas al mismo con cargo de Asistente Social Grado 18 al mismo que opera en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá—. —Ver prueba 6—.

DÉCIMO PRIMERO. – En la antedicha resolución se ordena la notificación del acto administrativo a la señora **EDITH JASMINA CORREALES GUÍO**, toda vez que ella era la persona que encabezaba la lista de elegibles.

DÉCIMO SEGUNDO. – El veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés, la señora Edith Jasmina Corrales Guio declina el interés y el derecho al cargo de Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá—.

DÉCIMO TERCERO. – Como consecuencia de lo anterior, el treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023), el señor **EDWIN ALBERTO BARÓN CHAPARRO** presentó recurso de reposición en subsidio apelación respecto de la Resolución 071 del primero (1º) de agosto de dos mil veintitrés (2023) al estar aquel en segundo lugar de la lista de elegibles para proveer el cargo de Asistente Social Grado 18 en Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. —Ver prueba 7—.

DÉCIMO CUARTO. – En primera instancia, la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad adoptó decisión mediante Resolución N°. 0094 de quince (15) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) en la cual resolvió **NO REPONER LA DECISIÓN** y **OTORGAR RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA**. —Ver prueba 8—.

DÉCIMO QUINTO. – El Consejo Superior de la Judicatura mediante *Acuerdo PCSJA23-12124* de diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) creó un (1) cargo de **Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad grado 18** del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá—, es decir, el segundo cargo creado dentro de la Convocatoria N°. 04. —Ver prueba 9—.

DÉCIMO SEXTO. – El cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) fui nombrada en provisionalidad como Asistente Social grado 18 en el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dentro del cargo creado a través de *Acuerdo PCSJA23-12124* de diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). —Ver prueba 10—

DÉCIMO SÉPTIMO. – En segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja mediante Resolución N°. 011 de quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) **DECLARÓ IMPROCEDENTE** el recurso de apelación formulado por el señor Edwin Alberto Barón Chaparro. —Ver prueba 11—.

DÉCIMO OCTAVO. – El veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) el señor Edwin Alberto Chaparro fue nombrado, mediante Resolución N°. 011, en propiedad y en carrera judicial en el cargo de Asistente Social Grado 01 del Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Tunja. —Ver prueba 12—.

DÉCIMO NOVENO. – El diez (10) de abril de dos mil veinticuatro (2024) mediante *Acuerdo N°. CSJBOYA24-38* el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare conformó lista de Elegibles, destinada a la provisión del cargo Asistente Social de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá— dentro de la Convocatoria N°. 4 del concurso de méritos;

mismo cargo que fue creado a través de Acuerdo *PC.SJ/A23-12124* de diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). La lista de Elegibles se conformó así: —Ver prueba 13—

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA — BOYACÁ—					
CÉDULA	NOMBRE	CÓDIGO	CARGO	GRADO	PUNTAJE TOTAL
7.179.328	BARON CHAPARRO EDWIN ALBERTO	260505	Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.	18	766,00
7.188.409	ESPINOSA RIVERA JULIAN FERNANDO	260505	Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.	18	744,82
40.041.123	FORERO CELY PAOLA ANDREA	260505	Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.	18	710,58
7.174.130	ORTIZ PEÑA FRANKY ALEXY	260505	Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.	18	629,46

VIGÉSIMO. – El once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024), la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad emitió *Acta de Posesión* de la señora Carolina García Vela en cargo de Asistente Social Grado 18 en Propiedad del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. —Ver prueba 14—.

VIGÉSIMO PRIMERO. – El doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024), la señora Carolina García Vela solicitó **LICENCIA NO REMUNERADA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS** para ocupar puesto de manera provisional en el cargo de Asistente Social Grado 01 en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes de Soacha —Cundinamarca—.

VIGÉSIMO SEGUNDO. – Luego, la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad profirió *Resolución N°. 009 de doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)* “Por medio de la cual se concede una licencia no

remunerada a una empleada del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja”. —Ver prueba 15—.

VIGÉSIMO TERCERO. – Como consecuencia de lo anterior, la legitimada por pasiva, mediante aviso convocó a postulación de las personas interesadas a ocupar el cargo de Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, correspondiente al cargo creado a través del *Acuerdo N°. PCSJA22-12028 de diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)*; mismo que se encontraba vacante en virtud de la concesión de la licencia no remunerada de la señora Carolina García Vela por dos (2) años.

VIGÉSIMO CUARTO. – Mediante *Resolución 011 de doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)* emitida por la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad realizó nombramiento en provisionalidad de la señora **JESSICA ANDREA ALCANTAR CÁRDENAS** “quien cumple con las exigencias legales para surtir la vacante en mención, y es integrante del Registro de Elegibles dentro de la Convocatoria dentro de la Convocatoria N°. 4 de empleados de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios” —se transcribe del texto original—. —Ver prueba 16—.

VIGÉSIMO QUINTO. – En mayo de dos mil veinticuatro (2024), el señor Edwin Alberto Barón Chaparro declinó el nombramiento en el cargo de Asistente Social Grado 18 de Centro de Ser Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma municipalidad.

VIGÉSIMO SEXTO. – El cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024) radiqué solicitud en ejercicio de mi derecho de petición a la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante el cual pongo en conocimiento mi situación de sujeto de especial protección constitucional reforzada, por lo cual, solicito a la entidad abstenerse de efectuar el nombramiento de quien, por concurso de méritos y carrera judicial, pueda acceder al cargo en propiedad y, en consecuencia, se prolongue mi nombramiento en el cargo en provisionalidad en aras de garantizar mi estabilidad laboral reforzada en virtud de mi situación constitucional. —Ver prueba 17—.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. – El veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024) la Dra. Gladys Arévalo; presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare remitió *Oficio N° CSJBOYO24-2757* a la Dra. Sonia Benavides Vallejo; Juez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá— mediante el cual permite informarle a aquella que —se transcribe del oficio original—: —Ver prueba 18—.

(...) corresponde a la autoridad nominadora, en ejercicio de su función, de conformidad con lo indicado en el artículo 131-8 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Analizar en su momento, si se dan los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional, para conceder estabilidad laboral reforzada a la servidora judicial nombrada en provisionalidad, iterando, bajo los postulados legales y jurisprudenciales, dentro de los términos de la ley, observando la legalidad de los actos administrativos que conforman la Lista de Elegibles y/o conceptos de traslado y realizando el estudio y ponderación, para determinar si realmente se presenta una tensión o colisión de dos derechos de raigambre constitucional, adoptando una decisión razonable sobre la provisión del cargo por el sistema de méritos en desarrollo de los principios consagrados en el artículo 125 de la Constitución Nacional.

VIGÉSIMO OCTAVO. – Mediante *Resolución N°. 071 de doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)* se realizó el nombramiento del señor Julián Fernando Espinosa Rivera como Asistente Social Grado 18 en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. —Ver prueba 19—.

VIGÉSIMO NOVENO. – El veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) presenté recurso de reposición en subsidio apelación contra la *Resolución N°. 071 de doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)* manifestando la necesidad de mantener mi estabilidad laboral reforzada en virtud de mi situación de sujeto de especial protección constitucional reforzada. —Ver prueba 20—.

TRIGÉSIMO. – El veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante *Resolución N°. 102-2024* estudió el recurso de reposición en subsidio apelación presentado el veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). En el aludido acto administrativo la Corporación resolvió inhibirse para conocer del recurso de reposición y en subsidio apelación incoado al colegir que no me encuentro legitimada en la causa por activa para recurrir la Resolución N°. 071 de doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). —Ver prueba 21—.

TRIGÉSIMO PRIMERO. – En virtud de que actualmente me encuentro en cargo de Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se me informó verbalmente que, el señor Julián Fernando Espinosa Rivera se posesionará en propiedad en el cargo que ocupó el primero (1º) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

1.2. CONSTITUTIVOS DE MI SITUACIÓN COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL:

PRIMERO. – El veinticinco (25) de febrero de dos mil seis (2006) me casé con **FABIO ENRIQUE OLARTE JIMÉNEZ**. —Ver prueba 22—.

SEGUNDO. – Fruto de esta relación, el quince (15) de agosto de dos mil seis (2006) nació nuestro hijo **GERÓNIMO OLARTE FORERO**. —Ver prueba 23—.

TERCERO. – En dos mil once (2011), fui diagnosticada con Síndrome Antifosfolípidos; un desorden de carácter autoinmune que produce trombosis recurrentes tanto en el lecho arterial como en el venoso, pérdida fetal recurrente y trombocitopenia. —Ver prueba 24—.

CUARTO. – Luego, fui diagnosticada con Síndrome de Sjögren; una enfermedad autoinmunitaria inflamatoria que puede darse de manera independiente o acompañada de otras afecciones autoinmunitarias como la artritis reumatoide (AR) o el lupus, razón por la cual, desde la fecha del diagnóstico, consumo medicamentos tales como:

- (i) Warfarina, un anticoagulante que funciona de manera preventiva ante la acumulación de plaquetas y, en consecuencia, la formación de coágulos que pueden causar trombos que conlleven al taponamiento de un órgano blanco como riñón, corazón, o cerebro, pudiendo desencadenar en un infarto cardíaco, una insuficiencia renal, hepática o un derrame cerebral.
- (ii) Azatioprina, un inmunosupresor que reduce la acción del sistema inmunitario del organismo, que puede provocar una disminución en la cantidad de células sanguíneas en la médula ósea, lo que puede provocar infecciones graves.

Como consecuencia de lo anterior, he padecido de diferentes afecciones tales como hipertensión arterial y sospecha de glaucoma.

En ese orden de ideas, constantemente me encuentro en seguimiento de sendas especialidades, a saber: (i) medicina interna; (ii) hematología; (iii) reumatología; (iv) oftalmología; (v) urología; y (vi) crónicos. —Ver prueba 24—.

QUINTO. – En dos mil dieciséis (2016), el señor Fabio Enrique Olarte Jiménez fue diagnosticado con la enfermedad catastrófica leucemia Mieloide Crónica, con baja adherencia al tratamiento médico, razón por la cual, desde la fecha, él no labora. —Ver prueba 25—.

SEXTO. – Luego, en octubre de dos mil veinte (2020) me divorcié del señor Fabio Enrique Olarte Jiménez, razón por la cual, realizamos trámite de **CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO**. —Ver prueba 26—.

SÉPTIMO. – Como consecuencia de lo anterior, desde la fecha me encuentro en situación de madre cabeza de familia estar en total cargo y cuidado de mi hijo, Gerónimo Olarte Forero.

OCTAVO. – El veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023), mi hijo Gerónimo Olarte Forero fue diagnosticado con epilepsia; una enfermedad catastrófica que altera de manera significativa nuestra cotidianidad y economía, toda vez que, requiere de la constante realización de exámenes y seguimiento por la especialidad de neurología; razón por la cual, nos transportamos de manera constante a Bogotá; lugar donde se encuentran los especialistas necesarios que logran proveerle la atención idónea y adecuada en proporción a su estado de salud y padecimientos. —Ver prueba 27—.

NOVENO. – El primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) mi hijo, Gerónimo Olarte Forero inició sus estudios profesionales en la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja, ocupándome yo de los gastos relacionados. —Ver prueba 28—.

1.3. DE DERECHO:

Para soportar jurídicamente los motivos por los cuales estimo vulnerados mis derechos fundamentales como consecuencia del actuar de la **COORDINACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA —BOYACÁ—**, esgrimiré sucesivas consideraciones en torno a la acción de tutela y la acreditación de los requisitos de procedencia de la misma en mi caso concreto.

1.3.1. De la acción de tutela:

La Constitución Política en su artículo 86 dotó a todos los asociados de un mecanismo mediante el cual pueden solicitar y obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades, disponiendo en su inciso 2º que la protección consistirá en una orden para que, respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. Igualmente, establece que procede la tutela en contra de particulares en los casos que establece la Ley.

1.3.2. De la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto

De conformidad con el orden jurídico aplicable en materia de tutela, dicha acción a pesar de ser un mecanismo informal y expedito, su procedencia —diferente a su admisibilidad—, se encuentra condicionada al cumplimiento concurrente o acumulativo de sendos requisitos, a saber:

- (i) Que con la acción de tutela se persiga la protección de derechos fundamentales —*idoneidad*—;

- (ii) Que el sujeto accionante sea quien directamente ve afectadas sus garantías fundamentales, como consecuencia del actuar de la entidad accionada, o quien la interpone actúe como agente oficioso, representante legal o representante judicial de aquel —*legitimación en la causa por activa*—;
- (iii) Correlativamente, que la entidad accionada sea aquella de la cual se puede predicar la circunstancia activa u omisiva que generó la vulneración alegada por el accionante —*legitimación en la causa por pasiva*—;
- (iv) Que la acción de tutela se presente ante la inexistencia de mecanismos ordinarios para la protección del derecho alegado o que aun, ante su existencia se demuestre que no son lo suficientemente idóneos y/o eficaces, o que se está utilizando la tutela como mecanismo de protección transitoria para evitar un perjuicio irremediable —*subsidiariedad*—;
- (v) Finalmente, aun cuando no existe legalmente un término de caducidad para interponer acciones de tutela, la jurisprudencia constitucional ha establecido únicamente que se debe presentar dentro de un plazo razonable, mismo que debe evaluarse de acuerdo con las especificidades del caso concreto —*inmediatez*—.

En estos términos, corresponde explicar de manera breve los motivos por los cuales estos requisitos concurren en el caso concreto.

1.3.2.1. Idoneidad:

La acción de tutela es el mecanismo idóneo en este caso, ya que se busca proteger derechos fundamentales como la estabilidad laboral reforzada y la igualdad, que han sido vulnerados debido a la falta de consideración adecuada por parte de la entidad accionada frente a las condiciones de salud que actualmente confrontamos mi hijo y yo. La tutela se justifica plenamente ante la vulneración flagrante de garantías constitucionales, puesto que, el nombramiento en propiedad de otra persona en el cargo que ocupo, me deja a mí y a mi hijo en una situación de vulnerabilidad extrema, comprometiendo nuestro sustento, en particular por mi condición de madre cabeza de familia y nuestros diagnósticos médicos severos. En consecuencia, la tutela garantiza una intervención inmediata y eficaz que no puede ser postergada sin causar un daño grave e irreparable.

1.3.2.2. Legitimación en la causa por activa

En la medida que yo, **PAOLA ANDREA FORERO CELY**, me veo afectada de manera personal y directa por las determinaciones de la entidad accionada, habida cuenta que derivan para mí en la imposibilidad de permanecer en mi trabajo y con ello en consecuencia, debe colegirse que me encuentro legitimada en la causa por activa para la presentación de este ruego constitucional.

1.3.2.3. Legitimación en la causa por pasiva

La acción de tutela está dirigida de manera correcta contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare – Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja; entidad directamente responsable de las decisiones que me afectan.

Esta institución es la que ha adoptado los actos administrativos cuestionados, tales como el nombramiento en propiedad del cargo de Asistente Social, ignorando la situación de estabilidad laboral reforzada que reclamo. Dado que esta entidad es la que ha vulnerado mis derechos fundamentales, ella tiene la legitimación pasiva para responder ante la presente acción.

1.3.2.4. Subsidiariedad.

En principio, podría pensarse que, puedo ejercer mecanismos judiciales ordinarios para la protección de mis derechos, como por ejemplo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la decisión de terminar mi nombramiento en provisionalidad como consecuencia del nombramiento de un funcionario de carrera judicial; sin embargo, dicho mecanismo no reviste eficacia en mi caso, dado que, el transcurrir propio de un proceso judicial ordinario, así como el agotamiento de los requisitos de procedibilidad previos a él, ocupan un prolongado período de tiempo que no se corresponde con la urgencia que reviste mi situación actual ante la terminación inminente de mi nombramiento en provisionalidad.

En precedencia se estableció que, enfrente una situación urgente y de especial gravedad debido a mi estado de salud y mi condición de madre cabeza de familia, lo que requiere una intervención inmediata. Los mecanismos judiciales ordinarios no pueden garantizar una solución pronta que proteja mis derechos fundamentales, por lo que la tutela es el recurso adecuado y necesario para asegurar dicha protección.

1.3.2.5. Inmediatez.

La tutela es presentada en un tiempo razonable y oportuno, dado que la amenaza de la vulneración de derechos es reciente y actual.

II. PRETENSIONES

PRIMERA. – AMPARAR de manera definitiva mis derechos fundamentales a la **IGUALDAD** y a la **ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA**, al estimarlos vulnerados por parte del **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE – CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA —BOYACÁ—**

SEGUNDA. – En consecuencia, **ORDENAR** al **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE – CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA —BOYACÁ—** la suspensión del trámite de nombramiento en propiedad en el cargo de Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, que ocupa la suscrita en provisionalidad.

TERCERA. – Subsidiariamente, **ORDENAR** la reubicación de la suscrita en un cargo de igual rango y remuneración al cargo de Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, como por ejemplo el que ocupa actualmente en provisionalidad la señora Jessica Andrea Alcantar Cárdenas en virtud de la licencia no remunerada de la señora Carolina García Vela.

CUARTA. – EFECTUAR o IMPARTIR, en ejercicio de las facultades *ultra petita* y *extra petita* del juez constitucional, cualquier otra declaración u orden que su Honorable Magistratura encuentre ajustada a Derecho con miras a buscar la protección de mis derechos fundamentales alegados como vulnerados u otros que, sin haber sido expresamente indicados, usted estime transgredidos por parte de la accionada.

QUINTA. – ORDENAR al **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE – CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA —BOYACÁ—** que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas

siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, remita a su Despacho las constancias respectivas del cumplimiento de las órdenes dadas con miras a conjurar la vulneración de mis derechos fundamentales, *so pena* de dar inicio a los trámites previos a la apertura del incidente de desacato del que trata el artículo 27 del Decreto – Ley 2591 de 1991, en concordancia, en lo pertinente, con la Ley 1564 de 2012.

SEXTA. – EXHORTAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOYACÁ Y CASANARE – CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA —BOYACÁ— para que en lo sucesivo se abstenga de desarrollar conductas similares, análogas o equivalentes que resulten constitutivas de la vulneración de mis derechos fundamentales.

III. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

Solicito medida provisional de suspensión del trámite administrativo de provisión del cargo que desempeño hasta tanto no exista sentencia de tutela en firme. Lo anterior en atención al artículo 7° del Decreto – Ley 2591 de 1991 y A259-21 de la Corte Constitucional de Colombia, sustentado en lo siguiente:

Requisitos para decretar una medida provisional	Naturaleza del requisito	Aplicación del requisito al caso concreto
Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (<i>fumus boni iuris</i>).	El primer requisito (<i>fumus boni iuris</i>), remite a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo. Aunque, como es apenas obvio en la fase inicial del proceso, no se espera un nivel total de certeza sobre el derecho en disputa, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo. Esta conclusión debe estar soportada en circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.	Este requisito está acreditado toda vez que, la nominadora realizará posesión del cargo en propiedad el primero (1°) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), lo cual, afectaría mis derechos fundamentales a la igualdad y, en especial, al mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada.
Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que	El segundo requisito (<i>periculum in mora</i>) tiene que ver con el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que de no	Este requisito se encuentra acreditado en el entendido que, si se surte el trámite natural de la acción de tutela, está tendría que resolverse en un plazo no mayor al quince (15) de octubre de dos mil

<p>haya un peligro en la demora (<i>periculum in mora</i>).</p>	<p>precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. Implica tener un alto grado de convencimiento de que la amenaza de perjuicio es <i>cierta</i>, y que el daño, por su <i>gravedad e inminencia</i>, requieran <i>medidas urgentes e impostergables</i> para evitarlo.</p>	<p>veinticuatro (2024), mismo término en el cual se verían afectados mis derechos invocados.</p> <p>En ese orden de ideas, es dable colegir que existe un alto grado de convencimiento de que la amenaza de perjuicio es cierta, por lo cual, se requiere el decreto de la medida provisional desde el auto admisorio de la acción de tutela para evitar este daño.</p>
<p>Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.</p>	<p>El tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. Si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y <i>a priori</i> de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso.</p>	<p>La decisión de adoptar la medida provisional supera el test de proporcionalidad de la siguiente manera:</p> <p>La medida es idónea ya que permite a no contribuir que no se materialice la vulneración de mis derechos fundamentales con ocasión a la separación del cargo por lo menos, hasta que exista pronunciamiento de fondo del juez constitucional en primera instancia.</p> <p>La medida es necesaria como quiera que en la situación actual satisface el fin antes mencionado y es la menos lesiva de las medidas.</p> <p>La medida es proporcional en sentido estricto, ya que, es mayor el beneficio que se obtiene en mis derechos fundamentales que la eventual afectación que se puede producir en los derechos fundamentales del servidor que va a tomar el cargo.</p> <p>Esto se explica por dos cosas. La primera de ellas</p>

		<p>radica en la naturaleza de los derechos alegados y, segundo, que, en principio, la medida provisional no afectaría ostensiblemente los derechos del funcionario que tomará el cargo, toda vez que al momento de la admisión su decreto sería provisional y hasta por el tiempo que dure el trámite, pudiendo llegar a desaparecer de acuerdo con las medidas que se adopten en un eventual fallo favorable o en caso de que la decisión sea negativa.</p> <p>En suma, con la medida provisional únicamente se pretende que no se materialice la separación del cargo hasta que el juez de tutela estudie mi situación jurídica.</p>
--	--	--

IV. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo de Boyacá para conocer de la presente acción de tutela en atención a que el artículo 37 del Decreto – Ley 2591 de 1991 señala que será competente para conocer de las solicitudes de amparo constitucional, a prevención, la autoridad judicial del lugar donde los hechos constitutivos de la vulneración, o donde produzcan plenos efectos —al tenor de los establecido por senda jurisprudencia constitucional—.

En adición a lo anterior, de conformidad con el inciso 2° del numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y a su vez este último, modificado por el Decreto 333 de 2021, con miras a establecer —sin perjuicio de las normas de competencia descritas en el numeral anterior—, a parámetros metodológicos para el reparto de las acciones de tutela entre autoridades judiciales:

“(…) Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria.”

—Subraya fuera del texto—.

Así, teniendo en cuenta los criterios jerárquicos establecidos en el mismo Decreto, le correspondería el conocimiento de la presente acción constitucional al Tribunal Administrativo de Boyacá, en virtud de la calidad de las partes.

En casos de similares contornos, se presentó acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo

Superior de la Judicatura y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sogamoso al estimar la accionante vulnerados sus derechos a la igualdad y la estabilidad laboral reforzada.

En primer lugar, avocó conocimiento la Sala Única del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, emitió fallo de primer grado el ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), se impugnó la decisión, por lo cual, correspondió su conocimiento por factor de competencia funcional a la Corte Suprema de Justicia; misma Corporación que, en atención a las reglas de reparto de la acción de tutela decisión declarar la nulidad de lo actuado dentro del proceso y ordenar el reparto de las diligencias al Tribunal Administrativo de Boyacá para su impulso en primera instancia.¹

V. JURAMENTO – AUSENCIA DE TEMERIDAD

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto al Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá que no he presentado alguna acción de tutela adicional fundada en los mismos hechos, fundamentos y pretensiones a los que hoy son sometidos a su consideración por medio de este escrito.

VI. PRUEBAS

Ruego tener dentro del presente trámite los siguientes documentos como pruebas, mismas que se adherirán como anexos de esta solicitud:

6.1. Acuerdo N°. CSJBOYA-17-699 de seis (6) de octubre de dos mil diecisiete (2017) emitido por el Consejo Superior de la Judicatura.

6.2. Acuerdo N°. PCSJA22-120228 de diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022) emitido por el Consejo Superior de la Judicatura.

6.3. Acta de posesión de dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés mediante la cual se posesionó a la señora Carolina García Vela como Asistente Social Grado 18 en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas —Cundinamarca—.

6.4. Acuerdo N°. CSJBOYA23-38 de catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023) expedido por El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare.

6.5. Concepto favorable de traslado calendado veintiuno (21) de abril de dos mil veintitrés (2023) proferido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.

6.6. Resolución 071 calendada primero (1º) de agosto de dos mil veintitrés (2023) de la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante la cual acepta traslado de la señora Carolina García Vela.

6.7. Recurso de reposición en subsidio apelación contra la Resolución N°. 071 de primero (1º) de agosto de dos mil veintitrés (2023) presentado por el señor Edwin Alberto Barón Chaparro.

6.8. Resolución N°. 0094 de quince (15) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) de la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad adoptó decisión mediante en la cual resolvió no reponer la decisión y otorgar recurso de apelación ante la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.

¹ Número de radicado 15001-23-33-000-2024-00184-00; M.P. Félix Alberto Rodríguez Riveros.

6.9. Acuerdo PCSJA23-12124 de diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) proferido por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el cual creó uno (1) cargo de Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad grado 18 del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja —Boyacá—.

6.10. Resolución 024 de 2024 proferida por la Coordinación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, el cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual fui nombrada en provisionalidad como Asistente Social grado 18 en el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

6.11. Resolución N°. 011 de quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el señor Edwin Alberto Barón Chaparro.

6.12. Resolución N°. 011 de veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual el señor Edwin Alberto Chaparro fue nombrado, mediante, en propiedad y en carrera judicial en el cargo de Asistente Social Grado 01 del Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Tunja.

6.13. Acuerdo N°. CSJBOYA24-38 el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare de diez (10) de abril de dos mil veinticuatro (2024) en el cual se conformó lista de Elegibles, destinada a la provisión del cargo Asistente Social de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.

6.14. Acta de Posesión expedida por la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024) de la señora Carolina García Vela en cargo de Asistente Social Grado 18 en Propiedad del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.

6.15. Resolución N°. 009 de doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024) de la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

6.16. Resolución 011 de doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024) emitida por la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad realizó nombramiento en provisionalidad de la señora Jessica Andrea Alcantar Cárdenas.

6.17. Petición de cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024) presentada a la Coordinación de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

6.18. *Oficio N° CSJBOYO24-2757* de veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare.

6.19. Resolución N°. 071 de doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual se realizó el nombramiento del señor Julián Fernando Espinosa Rivera como Asistente Social Grado 18 en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

6.20. Recurso de reposición en subsidio apelación contra la Resolución N°. 071 de doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

6.21. Resolución N°. 102-2024 de veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) mediante estudió el recurso de reposición en subsidio apelación formulado frente a la Resolución N°. 071 de doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

6.22. Partida de matrimonio entre Fabio Enrique Olarte Jiménez y la suscrita.

6.23. Registro civil de nacimiento de Gerónimo Olarte Forero.

6.24. Historia clínica de la accionante.

6.25. Historia clínica de Fabio Enrique Olarte Jiménez.

6.26. Escritura/Sentencia 2029 de 9 de noviembre de 2020 de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso entre Fabio Enrique Olarte Jiménez y la actora.

6.27. Historia clínica de Gerónimo Olarte Forero.

6.28. Polígrafo de pago de matrícula 2024-2 y polígrafo de notas del primer corte de Gerónimo Olarte Forero. —Se anexan estos documento, ante la imposibilidad de anexar certificado de estudio de mi hijo debido a situaciones administrativas propias de la Universidad—.

VII. NOTIFICACIONES

7.1. De la suscrita accionante:

La suscrita recibirá notificaciones en la dirección o correo electrónico paitofo@hotmail.com, o en el abonado telefónico 320-421-9728.

7.2. De la entidad accionada:

La entidad accionada recibirá notificaciones en la dirección o correo electrónico seccsejptun@cendoj.ramajudicial.gov.co - csadmjepmstun@cendoj.ramajudicial.gov.co ²

Atentamente,



PAOLA ANDREA FORERO CELY

C.C. N°. 40.040.123 expedida en Tunja —Boyacá—.

² Correo extraído de <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2341183/0/Correos+despachos+y+oficinas+atencion+seccional+Tunja/3f9a913d-5980-4da4-8dce-d8cdbc45e6ec>